

órgano del PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO de Argentina
Sección del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional

LA CRISIS INTERNACIONAL SE PROFUNDIZA

LOS EMPRESARIOS Y SUS
GOBIERNOS EN EL PODER
NO PUEDEN DARNOS MÁS
QUE BARBARIE

EL PRÓXIMO GOBIERNO,
SEA CUAL SEA,
DESCARGARÁ LA CRISIS
SOBRE NUESTRAS
CONDICIONES DE VIDA

REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS



Los trabajadores seremos, como siempre, las principales víctimas del agravamiento de la situación económica internacional Sólo nosotros podemos evitarlo

A las dificultades que arrastraba la economía: recesión industrial de dos años, inflación imparable, falta de dólares para importar insumos destinados a la producción, reducción del superávit comercial, déficit creciente del presupuesto, déficit energético, presiones devaluatorias, subsidios multimillonarios al transporte y la energía, etc. se suma el agravamiento de la crisis económica internacional. China que se desacelera, reduciendo sus importaciones, y empujando hacia abajo los precios de numerosos productos, Brasil el principal socio del Mercosur en recesión y con gran devaluación de su moneda.

Las cámaras patronales más poderosas están presionando muy fuertemente por una devaluación del peso para “recuperar competitividad” es decir bajar el costo en dólares de los salarios y otros costos que tienen en pesos, esta medida puede tener muy poca efectividad porque generalmente las devaluaciones se trasladan a los precios, metiendo leña al fuego de la inflación, perdiendo los efectos buscados.

Exigen también que se solucione el conflicto con los buitres, pagándoles, abriendo las compuertas para un endeudamiento del país. Esta es la vía para liberar el cepo cambiario, poder transferir sin problemas dividendos al exterior, poder acelerar las importaciones y también para fugar divisas. Por las venas de la burguesía circulan dólares y se desespera cuando no tienen la cantidad que aspiran contar. La gran reducción de la deuda externa por parte de este Gobierno es para ellos una gran oportunidad para volver a endeudarse, aprovechando las bajas tasas que se ofrecen en el mercado internacional.

Exigen que se termine con el déficit presupuestario, dicen que para sanear la moneda y bajar los niveles de inflación. Esto quiere decir que se ajusten las tarifas todo lo que se necesite, que se achiquen los presupuestos destinados a la seguridad social, a salud, a educación, y que los salarios se ajusten por debajo de la inflación. Al mismo tiempo que presionan para que se elimine el déficit reclaman que se reduzcan impuestos y retenciones. ¿De dónde saldrá el dinero para equilibrar las cuentas?

Con la excusa de la crisis internacional apretarán más a fondo para que se apliquen medidas drásticas

para hacer cargar a las masas con el costo. Ya están anunciando que habrá despidos en la industria automotriz antes de fin de año, no les alcanza con las suspensiones.

La respuesta de los trabajadores debe ser la defensa incondicional de los puestos de trabajo, la lucha por el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, que los salarios y las jubilaciones se ajusten mes a mes de acuerdo con la inflación, plan de obras públicas financiado con impuestos a las grandes fortunas que atiendan a resolver los problemas más urgentes de las masas. Sólo con la acción directa de masas se pueden imponer estas medidas, huelga, ocupaciones, movilizaciones, nunca por medio de leyes.

La gran crisis capitalista internacional que explotó en 2008 no solo no se cierra sino que se expande, se profundiza, y arrastra a todos los países, ninguno está blindado. La Presidenta ha dicho que el mundo se nos cae encima, pero es incapaz de tomar las medidas que se corresponden con semejante caracterización. Viviremos un período duro por el descalabro de las monedas, la caída de los precios de los productos que se exportan, por la caída de las exportaciones, por la carencia de divisas, por pérdida de reservas. Las migraciones de decenas y centenas de miles de personas en todo el mundo escapando del hambre y la desocupación se seguirán agravando a la par de las guerras y la descomposición capitalista. Empresarios y burócratas sindicales discuten con el futuro presidente las condiciones de un “pacto social” que resigne los reclamos de los trabajadores, en primer lugar las paritarias y garantice gobernabilidad. Para defender las condiciones de vida de las masas, sus ingresos, sus puestos de trabajo, es necesario tomar medidas a la altura de las circunstancias:

- 1) Se debe dejar de pagar la deuda externa e impedir toda forma de fuga de dólares. Todos los dólares deben ser aplicados a importar lo estrictamente necesario para mantener en pie la producción. Es criminal seguir pagando deuda externa como si no pasara nada.

2) Se debe nacionalizar el comercio exterior con el mismo fin. Para monopolizar íntegramente el flujo de divisas. Impedir el ingreso de bienes suntuarios o aquellos que pueden producirse en el país. Las devaluaciones en países exportadores abarata sus productos y ejercen una gran presión sobre el mercado interno para reemplazar con sus productos la producción local.

Así como puede ser criminal devaluar, por el impacto que tiene inmediatamente sobre los precios de los productos que consumimos, puede ser también criminal no devaluar porque se encarecen artificialmente en dólares los productos locales y se abaratan artificialmente las mercancías que se importan.

3) Por estos motivos, el monopolio del comercio exterior debe ser acompañado por la nacionalización de la banca, bajo control colectivo de los trabajadores. Todos los recursos deben ser puestos al servicio de proteger a los trabajadores, a las masas, no los bolsillos de los patrones.

4) Ya se debe poner en marcha un plan de obras públicas destinando los recursos necesarios, imponiendo un impuesto a las grandes fortunas,

atendiendo a las necesidades más urgentes de la población, viviendas, cloacas, agua corriente, gas natural, obras para resolver el drama de las inundaciones, etc. En vez de destinar miles de millones de dólares a importar locomotoras y vagones desde China, es necesario poner en pie rápidamente nuestra industria para producirlos localmente. Estos planes deben ser desarrollados bajo el control de los trabajadores, para garantizar la calidad de lo que se construye, para impedir que se roben los recursos los empresarios y los gobiernos.

La burguesía, incapaz de resolver los grandes problemas nacionales cuando contó con todos los recursos para hacerlo, no podrá hacer frente a la crisis económica internacional. La situación de la economía nacional se agravará. Sólo la clase obrera acaudillando a todos los oprimidos puede dar una respuesta a la crisis nacional e internacional, tomando las riendas de la Nación. Es necesario recuperar todos los sindicatos y la CGT para los trabajadores, para poder dar la lucha. Y es por eso imprescindible avanzar en la resolución de la crisis de dirección de la clase obrera, construyendo su partido revolucionario, el POR.

Las elecciones en Tucumán revelan la podredumbre de la politiquería burguesa

Aparece públicamente la entrega de bolsones de comida por parte de oficialistas y opositores, reconocido por el Gobernador, y otro tipo de beneficios, la utilización de costosas redes para llevar a los votantes al lugar de voto, utilización de enormes recursos para captar el voto popular, y también robo y cambio de urnas. Prácticas largamente conocidas en este último siglo. No son las ideas, no son los programas, no son las propuestas, las que se disputan para ganar el voto popular.

Es necesario denunciar permanentemente todo este sistema de punteros y clientelismo, de favores y prebendas. Mostrando que así es la democracia burguesa en la semi-colonia. Que no puede ser de otra forma. Los partidos que sostienen el régimen capitalista en descomposición no pueden ofrecer otra forma de hacer política. Tenemos que decir que no hay cómo reformar este régimen, hay que tirarlo a la basura, como un trasto inservible.

Decíamos que no hay lucha de ideas, no hay comparación de programas, sencillamente porque no los hay. A esto ha quedado relegada la política, a la saturación de slogans publicitarios, a mostrar la cara de los candidatos, a utilizar gigantescos recursos publicitarios para ganar el voto. Esto es politiquería. No se animan a decir lo que van a hacer porque no lo saben o porque temen perder votos. Todos mienten u ocultan sus objetivos verdaderos. Ninguno dice qué empresas o empresarios están detrás de ellos preparándose para captar los negocios del Estado o para continuar haciéndolo. Todos, oficialistas y opositores, utilizan

los peores recursos en la disputa feroz por apoderarse de la administración del Estado. Por eso, esto no se soluciona mejorando los controles, instruyendo a los fiscales, no se soluciona con voto electrónico.

La lucha desesperada por capturar o retener la administración del Estado llega a las amenazas, intimidaciones, matonaje, que hasta terminan con la vida de un joven militante radical en Jujuy. Esta lucha es un factor de crisis política. Debemos barrer con los politiqueros, los punteros y sus partidos. Denunciar todas las formas de corrupción. Debemos terminar con toda forma de censura o restricción a los partidos y candidatos para intervenir en las elecciones, los medios de comunicación deben ser abiertos para todas las organizaciones políticas y sociales que quieran hacer conocer sus posiciones.

En Tucumán se agrega la represión escandalosa contra quienes denunciaban los hechos fraudulentos y la detención de militantes de PO. Los responsables políticos y materiales de todos los hechos represivos deben ser sancionados duramente, en primer lugar el actual Gobernador

www.masas.nu
www.pormassas.org

• • • • •
• próximo cierre: 20-9 •
• • • • •

Alperovich. Se emplearon escopetas con balas de goma, dispararon de manera directa al cuerpo de los manifestantes, los proyectiles policiales produjeron decenas de heridos, lanzaron gases lacrimógenos, la policía montada golpeó a personas que estaban manifestándose y policías de civil sin identificación realizaron detenciones, muchas de ellas con violencia.

Muy posiblemente la Lista oficialista se habría impuesto sin todas las irregularidades conocidas, ya que dos semanas antes habían triunfado muy ampliamente en las PASO. Pero las irregularidades existieron en un buen número de mesas, violando la voluntad de quienes votaron allí. Se debe tener cuidado también en no caer en el juego de la oposición burguesa y desconocer la voluntad del sector aparentemente mayoritario que ha votado y se encuentra representado por el resultado de las elecciones.

La oposición, que sabe que difícilmente pueda revertir los resultados de las Paso a nivel nacional, utiliza el recurso de la denuncia del fraude generalizado para intentar desmerecer los resultados del ganador. Reclaman que se realicen nuevamente las elecciones, con la misma Justicia electoral, con los mismos partidos, mesas, fiscales, con la misma policía, etc.

En tanto un sector masivo tiene expectativas en que con su voto esta eligiendo, y quiere que se garantice la transparencia del acto electoral, el acto del comicio debe ser tomado íntegramente en manos de los vecinos, sin intervención de la Justicia, ni el Estado, custodiando personalmente las urnas, fiscalizando entre todos el acto electoral, garantizando que estén presentes las boletas de todos

los candidatos, contando hasta el último voto y haciendo público el resultado de la elección en cada sector, defendiendo las urnas donde se depositaron los votos. No podemos confiar en las instituciones del Estado burgués y sus partidos el control de las elecciones. El POR llamará a anular el voto, porque no cuenta con candidatos ni listas que expresen la política de la clase obrera, y plantea que, aquellos que creen que su voluntad está representada en alguna lista o candidato deben garantizar las elecciones tomándolas íntegramente en sus manos, desde el principio al fin, autoorganizándose.

La verdadera política es otro tema. Los revolucionarios hacemos política, la verdadera política, con ideas, decimos lo que pensamos, cuál es nuestra estrategia, cómo transformaremos el país, cuáles son las tareas principales, y que sólo podrán ser impuestas por la intervención de las masas. No ocultamos nuestras ideas aunque eso signifique que sólo un sector minoritario las apoye. Ayudamos a desenmascarar a todos los politiqueros y también a los democratizantes que pintan maravillas del Congreso y lo bueno que es contar con diputados y concejales.

Todo el tiempo debemos alertar contra un régimen que de conjunto es fraudulento, que se basa en el engaño, para preservar el interés de una minoría que tiene los medios de producción, que tiene el poder real. Decimos que el voto no nos iguala, aunque cada ciudadano tenga un solo voto, porque los dueños de los bancos, de las tierras, de las fábricas, aunque tengan pocos votos, o no los tengan porque son extranjeros, son los que tienen el poder en sus manos, gane quien gane las elecciones. Ellos son los que deciden por todos nosotros.

A 39 años de la noche de los lápices ¡Viva la Lucha estudiantil!

Este 16 de septiembre se cumplen 39 años de la represión estudiantil que desapareció y torturó 10 militantes secundarios de la ciudad de La Plata. Del 16 al 19 de septiembre de 1976 se llevaron a cabo los operativos de secuestro de los compañeros Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciochini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Emilce Moler, y Gustavo Calotti por grupos de tareas, bajo las órdenes de Miguel Etchecolatz.

Todos fueron torturados siguiendo los métodos de los militares formados en la Escuela de las Américas, dando cuenta de que la organización de las dictaduras latinoamericanas fue planeada por el imperialismo plasmada en el Plan Cóndor.

Los crímenes de la dictadura militar son crímenes de clase. Fueron la burguesía nacional y el imperialismo los que ordenaron el golpe, que precisaban destruir a las organizaciones de la clase obrera y de los demás oprimidos que amenazaban su poder. Por eso decimos que no habrá justicia hasta que expulsemos a esta clase del poder, poniendo en pie tribunales populares para juzgar a los genocidas, a los empresarios y políticos que se beneficiaron con la dictadura militar

La lucha de los compañeros secuestrados y asesinados durante la dictadura militar mantiene hoy plena vigencia: el sistema

educativo incluso ha profundizado la privatización de las instituciones educativas, ha disminuido el presupuesto para escuelas públicas que se caen a pedazos, cierra cursos dejando sin matrícula a miles de estudiantes y sin trabajo a sus maestros, mantiene salarios miserables para los trabajadores docentes y no docentes, no garantiza las condiciones mínimas para el estudio (fotocopias, viandas, boleto educativo gratuito e irrestricto para todos los niveles, vestimenta, etc.). Por todo esto decimos que la reivindicación de su lucha consiste en levantar sus banderas, pero imprescindiblemente por afianzar la organización política estudiantil y de la juventud en general, en torno a la resolución de estos conflictos que hacen cada vez más difícil estudiar para conocer.

La organización de la juventud desde sus bases, desde sus asambleas, centros de estudiantes y organismos, con sus métodos de toma de escuelas, movilizaciones masivas, cortes de calle, clases públicas es la única forma en la que podremos imponer nuestros reclamos.

¡¡¡COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!!!

¡¡¡BOLETO GRATUITO IRRESTRICTO PARA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS!!!

La crisis edilicia es producto del miserable presupuesto que impone el Gobierno Nacional a las Universidades Públicas

En la Universidad Nacional de Comahue hace muchos años que se vive un proceso de deterioro de la estructura edilicia. En los últimos diez años se crearon nuevas Facultades y nuevas carreras, por lo que la matrícula de ingreso creció, al igual que la planta administrativa y docente, sin embargo este crecimiento no fue acompañado de un aumento del presupuesto estatal. Para poder cubrir las necesidades financieras comenzaron a crecer los convenios con municipios y empresas privadas, sin embargo estos no se traducen en mejores condiciones de estudio y trabajo.

Este año el deterioro edilicio generó una crisis muy aguda en el funcionamiento cotidiano de la Universidad. Se llegó a un extremo que obligó durante el primer cuatrimestre al rector Gustavo Crisafulli a decretar la “emergencia edilicia”. Con ello, la SPU (Secretaría de Políticas Universitarias –organismo del Ministerio Nacional de Educación-) debió enviar partidas presupuestarias extras a la UNCOMA. Con esta acción política el Gobierno Universitario hizo campaña usando argumentos técnicos y burocráticos para hacer creer que mágicamente la crisis edilicia se resolvería. Así garantizaron mantener las cursadas en edificios como el de Humanidades que está en pésimas condiciones y es usado por más de una facultad. Tanto es así que se llegó a cursar sin gas en pleno invierno patagónico. La Decana, el Rector y los militantes del Frente para la Victoria impulsaron la reducción de la jornada laboral de los trabajadores administrativos y la reducción de horarios de cursada, y para el frío compraron pantallitas eléctricas, una vergüenza. Esto, claro está, trajo muchos inconvenientes, todos nos vimos obligados a hacer el mismo trabajo en menos tiempo.

El presupuesto que se destina a la Educación Superior es una decisión política. Año a año en el Congreso Nacional se vota el presupuesto para las Universidades dentro del Presupuesto General Nacional. Por esto decimos que es una decisión política, resultado de un debate. Si bien se otorgaron aumentos estos no están a la altura de lo que se necesita para el funcionamiento y mucho menos para el desarrollo de las Universidades. El Gobierno Nacional hace demagogia con la “década ganada” con las “trece nuevas universidades creadas”, pero lo cierto es que la crisis presupuestaria y edilicia de las universidades es estructural y atraviesa a todo el país.

De la cantidad de dinero que se destina a las universidades el 90% es para salarios docentes. A pesar de ello, más de 30.000 docentes en todo el país trabajan ad honorem. Sólo un 10% queda para ser repartido entre investigación, planes de obras de construcción, comedor, materiales de estudio, viajes, etc. Esta política de ahogo presupuestario es la que viene implementando el Gobierno Nacional desde su primer mandato.

El impacto de la política de ahogo presupuestario tiene como contracara la búsqueda de recursos propios, de autofinanciamiento. Los ejecutores e impulsores de esta política son todo el arco de rectores y decanos, que administran las migajas, a cambio de ostentosos sueldos y la posibilidad de hacer sus propios negocios con los posgrados, con los convenios con terceros y hacer acuerdos políticos entre los municipios y los gobiernos provinciales a cambio de dinero. Esta política es la decadencia de las universidades, es la violación constante de la autonomía, quedando los planes de estudios e investigaciones subordinadas

a los intereses de quienes financian.

Un ejemplo contundente del fracaso de esta política son los acuerdos que la Universidad de Comahue, (Facultad de Ingeniería), hace con las multinacionales petroleras instaladas en la región. La facultad ofrece: pasantías, sus laboratorios, permite la modificación de los planes de estudios de acuerdo al interés privado y el famoso financiamiento externo no se refleja en un aumento en la construcción de aulas, la creación de un comedor que contenga a toda la población estudiantil, mayor número de docentes, etc. Al contrario, es esta una facultad con una profunda crisis en su capacidad edilicia.

La apertura del segundo cuatrimestre en la Facultad de Humanidades comenzó con un llamado a una asamblea inter-claustros, impulsada por un sector de docentes. Se resolvió no tomar examen, llamar una conferencia de prensa para denunciar la situación edilicia y movilizar al Consejo Superior para exponer nuestros reclamos. Rápidamente la gestión resolvió la habilitación del gas en una parte del edificio, para que se realicen las mesas de examen. La movilización al Consejo Superior dejó en evidencia que la dimensión de la crisis involucra a todas las facultades, porque la participación excedió a Humanidades.

Como organización pensamos que esta situación es posible revertirla, si tomamos los estudiantes la problemática en nuestras manos y fortalecemos los incipientes espacios de asambleas inter-facultades e inter-claustros que comenzaron a tener lugar luego de la movilización. La experiencia día a día nos muestra que la estructura del Gobierno Universitario, permite legalizar la política de la gestión de Crisafulli, sostener el funcionamiento de la Universidad con un presupuesto miserable condenando a la precarización laboral a los docentes, la tercerización de los servicios y a que los estudiantes tengamos que pagarnos absolutamente todo: colectivos, materiales de estudio, alquileres, etc. Estas son las principales causas de deserción, es porque no nos alcanza que nos veamos obligados a abandonar los estudios o prolongar demasiado las carreras.

Es necesario retomar la experiencia de la organización estudiantil a través de la Federación y los Centros de Estudiantes. Fortalecer nuestros verdaderos espacios democráticos, somos nosotros junto con los docentes los que cursamos en edificios que se caen a pedazos, es menester discutir desde los cursos un petitorio que contemple todas nuestras demandas y votar los métodos para conquistar nuestros reclamos. Tenemos que barrer a las direcciones estudiantiles que se conforman con hacer denuncias a través de los medios y depositan todas sus expectativas en las pequeñas negociaciones con la gestión, sin respaldo de la movilización estudiantil. Las organizaciones de izquierda y activistas tenemos la responsabilidad de conquistar la voluntad de nuestros compañeros estudiantes, que hoy se encuentran cursando con malestar para imponer a través de la movilización nuestro pliego de reclamos en el Consejo Superior y al Rectorado.

El FEI (Frente de estudiantes independientes, dirigido por Patria Grande-Corriente estudiantil La Mella) y el PCR-CEPA llevan años, ya sea en mandatos separados o como frente, en la dirección de la Federación y han profundizado la brecha entre la base estudiantil y la dirección, no son la dirección política que

necesitamos para luchar en unidad por nuestras demandas. La agrupación estudiantil Jaureche, kirchnerista, dirige el centro de estudiantes de Humanidades jugó un rol muy importante de desmovilización, la única asamblea general que convocaron fue producto de la imposición y no llevaron adelante el mandato votado. Su rol es el de contener cualquier intento de movilización.

Desde Poder Estudiantil invitamos a todos los estudiantes que

apoyan nuestra intervención en el Consejo Directivo a discutir y tomar acciones con esta política, fortaleciendo la participación y organización desde los cursos. Un año de mandato de una agrupación impulsada desde el PJ nos muestra la importancia de recuperar el Centro de estudiantes para que se transforme en una verdadera herramienta que organice la lucha por mayor presupuesto.

¿Cómo calificar la inconducta de los activistas y delegados que arreglan con la patronal su renuncia?

Los activistas y delegados clasistas son un producto colectivo de la clase obrera, son lo mejor y son su síntesis.

Son las cualidades de esos compañeros lo que los destacan entre todos los trabajadores, por su interés por la organización del conjunto, por cómo expresan los reclamos, por su diferenciación con la burocracia, por su independencia frente a la patronal, son compañeros que acumulan sus propias experiencias desde otros trabajos, en la relación con otros activistas, en otras luchas, se interesan por los problemas políticos y tratan de analizar la política desde el punto de vista de los trabajadores. Todo eso los distingue. Por eso los trabajadores prestan atención a lo que hacen, a lo que proponen, y los siguen y los colocan en posiciones dirigentes. Hay características individuales, de personalidad, de dedicación, solidaridad, preparación, que los lleva a ocupar ese papel, y es la actividad del conjunto lo que ayuda a su maduración. Los activistas y delegados clasistas tienen un gran valor para la clase obrera, ellos traen consigo una acumulación de experiencias, de conocimientos, que son vitales para la clase obrera. El Partido revolucionario busca expresar las tradiciones, el programa, la política de la clase obrera, y esta se tiene que transformar en fuerza material entre esos trabajadores, entre los mejores de su clase.

Las patronales, la burocracia, los gobiernos, tienen conciencia de la importancia que tienen delegados y activistas en la base, tratan por todos los medios de detectarlos antes de que se conviertan en referencia para echarlos. Y cuando ya son visibles buscan por todos los medios de intimidarlos o corromperlos, o ambas cosas.

Así como la clase obrera se fortalece, levanta cabeza, se anima a dar nuevos pasos adelante, cuando logra poner a su cabeza a los mejores, cuando encuentra su dirección, cuando pierde a esos activistas o delegados se debilita, siente impotencia. Si los pierde en la lucha puede asimilar el trago amargo. Pero si los pierde porque los compra la patronal, se produce un retroceso. Se crea la idea de que la patronal y la burocracia pueden comprar todo, que todos “tienen su precio”, aún los que parecían más combativos e irreconciliables con el patrón.

Para la patronal las indemnizaciones significan poca cosa en comparación con la ventaja de desorganizar y desmoralizar a sus trabajadores. Siempre les duele el bolsillo, cuando tienen que poner sumas importantes para *sacarse de encima* a un trabajador, pero prevalece más el interés general, ahorrar futuros conflictos. Y es un logro para la patronal mostrar que le ha puesto precio a un buen activista, reconocido, y que esa actitud puede llevar a otros a seguir el mismo camino.

La burocracia hace campaña para mostrar las virtudes de los microemprendimientos, de “trabajar sin patrón”, poner un kiosco, poner un auto a trabajar, etc. para justificar las indemnizaciones.

No hay excusa que valga, todos los trabajadores pasan por situaciones de necesidad, y muchos padecen situaciones extremas, dramáticas. No hay cómo justificar que un activista o delegado se venda. Él no es propietario del lugar que ocupa, ha sido puesto en esa situación por ser el que mejor expresa los intereses más generales de los trabajadores, el que mejor organiza, el que mejor prepara la lucha contra la patronal. No es propietario individual de su lugar en la lucha de clases. Si decimos que no hay dinero que pague un puesto de trabajo, rechazando las indemnizaciones de Ley, con mayor fuerza decimos que no hay dinero que pague el puesto de lucha de un activista.

Cuando un delegado o un activista deja su lugar de lucha se produce una amputación física de la clase obrera, difícil de reconstruir. Peor todavía cuando es por arreglo voluntario, por el efecto de desmoralización que produce en el resto de los trabajadores. El arreglo debiera caracterizarse como una traición a la clase, dar la espalda al mandato que ha recibido. Cada activista, cada delegado clasista, es el producto de un larguísimo proceso de experiencia, de formación, y cuesta encontrarlos y mucho más cuesta reemplazarlos, son imprescindibles en la tarea de independizar a la clase obrera de toda tutela de la burguesía.

El objetivo más importante de la última dictadura genocida, fue desorganizar y desestructurar al movimiento obrero y las organizaciones sociales y políticas, arrancar de golpe lo mejor, esos miles de luchadores que no arreglaban, no había plata que comprara su militancia. El proceso de reconstruir esa vanguardia clasista, imprescindible, nos lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. No podemos permitir perder uno solo de los elementos más valiosos. Debemos criticar duramente, sin contemplaciones, estas actitudes para impedir que se repitan, debemos ejercer la máxima presión de clase para evitarlo. Si es posible tratar en asambleas estas situaciones y votar en contra de los arreglos. No hay salvación que valga individualmente, la clase obrera se salvará y salvará al resto de los oprimidos, colectivamente, actuando como un único cuerpo, aplicando su política, sus métodos. A quienes traicionen este mandato debemos escracharlos públicamente para que no puedan vivir en paz con su conciencia, para que no vuelvan a repetir lo que hicieron en otros lugares de trabajo, para evitar que otros puedan ser ganados por estas actitudes.

Luchemos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito

El 1 de septiembre el Papa publicó una carta dirigida a todas las autoridades de la Iglesia Católica (sacerdotes, cardenales, etc.) a través de la cual les otorga en el marco del Año de Jubileo la facultad para “perdonar a aquellos que hayan cometido el pecado del aborto y se arrepientan de corazón”. Estarían incluidas las mujeres que decidieron practicarse un aborto y los equipos médicos o no médicos que hayan colaborado en que este hecho se pueda llevar adelante con éxito.

Estas declaraciones que han sido propagandizadas por todo el mundo como una apertura de parte de la máxima autoridad de la Iglesia hacia la posibilidad que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos no son más que una farsa. En primer lugar porque seguido a estas declaraciones el Papa aclaró que la Iglesia Católica estuvo, está y estará en contra del aborto.

Ciertamente no se puede negar que las declaraciones del Papa abrieron una crisis dentro de la Iglesia Católica mundial. En el marco de su próxima gira por Estados Unidos, sectores denominados “ortodoxos” señalan que el poder del Papa no es absoluto y su rechazo a este tipo de declaraciones. Esta crisis demuestra el carácter completamente retrógrado de la Iglesia Católica Romana. Queda claro que no está compuesta como dicen de seres dedicados al cuidado de la humanidad, todo lo contrario son altos funcionarios que contribuyen con sus acciones a profundizar el sometimiento ideológico de la población, que trabajan cotidianamente para que los oprimidos del mundo acepten con resignación el orden establecido y que tienen íntimas relaciones con lo más descompuesto del capitalismo mundial. Las declaraciones del otorgamiento del “perdón” forman parte de esta lógica de sometimiento, porque para “ser perdonadas” debemos declarar “arrepentimiento”.

Cuando se habla en contra de la práctica del aborto, lo primero que se dice es que “se está defendiendo la vida”. Así lo demuestran las grandes movilizaciones ocurridas en Chile durante estas últimas semanas, donde grupos anti aborto llenaron las calles de carteles con consignas de “sí a la vida”. Esto es una actitud hipócrita, porque justamente en el estado actual de la sociedad lo que no está garantizado es el derecho a la vida. La enorme crisis capitalista que ha derivado en guerras, invasiones, miles de refugiados huyendo de sus países lo demuestra. Y aunque se viva en un país que no se encuentre abiertamente en guerra tampoco está garantizado el derecho a la vida. En Argentina por ejemplo, el nivel de vida, lo básico que se necesita para crecer y desarrollarse como persona es cada vez más inalcanzable. Cientos de mujeres, hombres no consiguen trabajo y por tanto con qué sostenerse. En las grandes ciudades abunda la desnutrición infantil y ni hablar en las zonas rurales.

La nacionalidad del Papa, hizo que estas declaraciones tuvieran repercusiones particulares en nuestro país. Ante

una conferencia de prensa el jefe de gabinete Aníbal Fernández declaró que no está contemplado dentro de los planes del gobierno Kirchnerista permitir que se trate en el Congreso Nacional el proyecto de Ley por la despenalización del aborto.

Estas declaraciones están en el marco de un pacto sellado desde hace años entre los altos mandos de la Iglesia Católica argentina y el Gobierno Nacional. Este quedo plasmado en el artículo 19 del nuevo Código Civil, en el cual se cambia la concepción del “origen de la vida” y se define al mismo como “desde el momento de la concepción”, permitiendo así que el hecho de abortar se transforme en una violación del código. Este acuerdo forma parte de las razones por las que no se discutirá el derecho al aborto legal dentro del Congreso Nacional.

En Argentina desde hace tres décadas el Encuentro Nacional de Mujeres viene debatiendo la necesidad de que el aborto sea legalizado para que se pueda llevar adelante en condiciones de seguridad. Existe una Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito. Miles de mujeres mueren año a año como resultado de complicaciones derivadas de abortos clandestinos, lo cual demuestra que efectivamente se realizan. Es sabido que aquellas mujeres que cuentan con el dinero suficiente para practicarlo en una clínica privada tienen menos riesgos de sufrir complicaciones. Están mayormente expuestas las mujeres laburantes, de las villas, que ciertamente no cuentan con ese dinero.

Como organización consideramos que el aborto debe ser legalizado y practicado dentro del sistema público de salud, porque es un derecho de las mujeres decidir sobre nuestros propios cuerpos. Para además terminar con este gran negocio que mencionamos.

Es necesario que profundicemos el debate y que liguemos el derecho al aborto legal a la lucha por las condiciones de vida en general, es decir, el derecho a un trabajo, a un salario que como mínimo cubra el costo de la canasta familiar, el derecho a la vivienda, al acceso a la salud, a la educación.

Estos derechos los conquistaremos organizándonos, en las calles, en los lugares de trabajo, de estudio, por los barrios. Es por el camino de la autoorganización y la independencia de las organizaciones patronales que lograremos imponer estos derechos.

Vemos como una desviación política que las organizaciones hagan énfasis en los proyectos de ley para que se legalice el aborto. Las mujeres y los trabajadores en general debemos concientizarnos y movilizarnos para imponer el aborto legal, este es el camino, proyectos sobran.

Saludamos que muchas médicas y voluntarias arriesguen su trabajo acompañando a las mujeres que abortan y tienen que acudir a un hospital, pero no por esa vía que se resuelve el problema, hay buscar una solución de conjunto.

A dos años de la firma del pacto Chevron- YPF: despidos, suspensiones, endeudamiento y contaminación

En agosto del 2013 se votó en la Legislatura neuquina el acuerdo Chevron – YPF, con una represión de siete horas contra todas las organizaciones políticas, sindicatos, partidos de izquierda y organizaciones mapuches, que se movilizaron ese día. El Gobierno Nacional apoyó públicamente la decisión del MPN de votarlo, y prometió la panacea para la población neuquina. Los resultados de la represión fueron 28 heridos y un docente que todavía tiene una bala en el cuerpo.

El contenido del acuerdo fue desconocido para la población, no hubo acceso a las cláusulas, incluso se sabía que a algunos ítems ni los diputados podían acceder. Sin embargo la poca información que circuló dejaba ver el carácter leonino: un acuerdo de concesiones a 35 años, tasa de regalía a 12 %, derecho a exportar sin pagar impuestos y a mantener parte de los fondos en el exterior.

A dos años de este hecho el debate alrededor de los recursos petroleros se renueva porque hay suspensiones, despidos e intenciones de bajar las horas taxis en varias de las petroleras más importantes, sumado a la contaminación que afecta directamente a la población. Desde la firma del acuerdo, en Loma Campana se generaron 2.000 nuevos puestos de trabajo, y el yacimiento es el segundo más importante del país, cuenta con 380 pozos en producción que aportan 40.0000 barriles por día, en un área que es el 1% de Vaca Muerta, tiene 23 equipos de perforación sobre 55 que hay en Neuquén. Esto lo que demuestra es que era falso lo que decía el Gobierno, que se generarían diez mil puestos de trabajo.

A pesar de la enorme masa de dinero que se maneja a partir de la actividad petrolera, el Gobierno Provincial aduce que la Provincia está al límite, que es imposible pensar en algún aumento salarial para los estatales por ejemplo. Este año se votó un endeudamiento en más de 350 millones de dólares, y se ha permitido que las petroleras eludan pagar regalías. Por otro lado YPF argumenta que cubrirá el desfase con poda en los contratos de servicios, recorte en horas muertas o taxi, planes de retiro voluntario.

Si bien hubo una serie de despidos, por ahora en Schlumberger, Halliburton, Baker y Weatherford están parados. A nivel internacional hay miles de despidos, no obstante la producción provincial no ha bajado, y existe una especie de blindaje a nivel nacional del barril a 77 dólares, es decir las empresas cobran dentro del país un 50% más que el precio del mercado mundial. Como siempre los capitalistas aprovechan para recortar gastos, las grandes operadoras buscan trasladar el ajuste a los trabajadores, y la burocracia sindical promete paz social. Pereyra, el titular del sindicato petrolero dijo que no va a convocar a un paro, porque si no habrá más despidos. Con un costo de 9 dólares por barril (costo de producción), salarios en pesos y una canasta familiar que llega a los \$20.000 en la Patagonia, no hay que permitir ni un solo paso en el ajuste. La burocracia controla los lugares de trabajo y la dispersión de la producción dificulta las reuniones, pero es necesario organizarse desde abajo para que las multinacionales no impongan sus planes de recortes.

Hay varios niveles de afectación en esta coyuntura, en primer lugar la población en general, que no ve ninguna de las promesas que hizo el Gobierno en materia de vivienda, educación o salud. Por el contrario sufre el ajuste salarial producto de la inflación y los sobrepagos en alquileres por ser una zona petrolera, los obreros petroleros suspendidos y todos los trabajadores que viven alrededor de esos sueldos. Este tipo de acuerdo y de extracción sólo beneficia a las multinacionales, y la burguesía local que tiene las empresas tercerizadas. La variación en el precio internacional del petróleo no es un asunto que pueda controlarse localmente, nos encontramos en un país con una economía de relaciones semicoloniales, que quedan expuestas en esta crisis.

No debe permitirse ninguna medida de ajuste contra los obreros petroleros, hay que sacarse de encima la burocracia de Pereyra, que es el mejor aliado de las empresas. La nacionalización y estatización sin pago del petróleo debe comenzar con un gran debate de la población en general, pero no se podrá imponer sin el sector de trabajadores petroleros, ellos son los únicos que tienen la fuerza. Mucho menos con un proyecto de Ley en la Legislatura. Como partido iniciaremos una campaña de afiches con la siguiente consigna:

**77 dólares el barril- 9 dólares de costo ¿Quién está en crisis? Ningún despido ni ajuste a los obreros petroleros
Estatización del Petróleo**

Somos el conjunto de los explotados los que debemos debatir y decidir cómo y cuánto petróleo necesitamos producir, en función del desarrollo de la Nación. No necesitamos ninguna multinacional intermediaria, los recursos para garantizar la explotación de petróleo se encuentran en el país y si hacen falta algunos hay que desarrollarlos. Basta de entrega de nuestras riquezas a las multinacionales imperialistas que vienen, se instalan, explotan hasta agotar los recursos, se llevan millones y nos dejan tierra arrasada. ¡Fuera Chevron de Argentina!

Para las petroleras LA VIDA NO VALE NADA

El pasado viernes 28 de agosto en Comodoro Rivadavia murió un obrero, y otros tres resultaron gravemente heridos en la empresa Tecpetrol del grupo Techint. Cristian Gutierrez , un soldador de 36 años, que ganaba \$22.000 por mes perdió su vida. Para la burocracia sindical de Chubut se trató de un accidente, y destacó el sueldo que ganaba el obrero mensualmente. Para las petroleras la vida de Cristián no vale más que una miserable indemnización a la familia, son las mismas empresas que financian guerras donde mueren millones de personas, tienen las manos manchadas de sangre. Son las que dejan “zonas de sacrificio”, es decir contaminan el agua y destruyen los lugares de donde extraen el petróleo. Manifestamos nuestra solidaridad con la familia de Gutierrez y nuestro más enérgico repudio tanto a las multinacionales como a la burocracia que vive del sudor de los obreros, y no se conmueve ni siquiera frente a la pérdida de una vida.

¿Por qué es necesario estatizar todo el transporte automotor bajo control obrero colectivo?

Luego de la crisis del 2001 y en un contexto de aumento del precio del petróleo, el gobierno desarrolló una política de subsidios, fundamentalmente al transporte y a la energía, con el objetivo de mantener las privatizaciones realizadas bajo el gobierno de Menem y de no realizar estatizaciones siempre y cuando fueran evitables.

En este cuadro general se inscribe la crisis del transporte a nivel nacional y en todos los niveles (ferroviario, automotor, de carga, de pasajeros, de corta y larga distancia, etc.). Los gobiernos burgueses son incapaces de dar la respuesta nacional y planificada que requiere el problema porque gobiernan para los intereses de las grandes empresas y sobretodo del imperialismo y del capital financiero, en este caso, de las multinacionales automotrices y petroleras, cuyos intereses han demostrado atentan contra los de la nación oprimida.

La política de subsidios de los gobiernos de los Kirchner debe analizarse dentro del conjunto de su política económica, y sus limitaciones como expresión de las contradicciones entre las necesidades nacionales y su programa de gobierno. El principal obstáculo para desarrollar una política consecuente de transporte a nivel nacional es colocar a la rama automotriz, la producción de automóviles, como el principal resorte industrial de crecimiento económico. Dado que corresponde a los intereses de las multinacionales automotrices, este programa significa un costo muy alto por el bajo nivel de producción de partes en el país, lo que lleva a que para producir 10 autos, sea necesario importar el equivalente a 6 o 7. Se vuelcan recursos y trabajo para producir automóviles en lugar de fabricar locomotoras y rieles.

Esta política mostró sus límites en los últimos años, por depender profundamente de la economía brasilera (principal importadora de los vehículos) y por requerir un alto nivel de consumo de combustibles. Ambos potencian la crisis de la balanza comercial por el requerimiento de importar partes y combustible, lo que se profundiza con la política de pagar la deuda externa. De conjunto todo esto conduce a la crisis de la balanza comercial, es decir, a que las necesidades de importación de la economía crezcan más rápido que su capacidad para exportar.

Por otro lado el Gobierno se vio obligado a desarrollar la política de subsidios para no agregar más leña al fuego de la inflación, sabiendo que si permitía un ajuste libre de las tarifas no solo sería una confesión de los verdaderos niveles de inflación (con una tarifa de colectivo que hoy llegaría a los \$15), sino que llevaría a las masas a luchar por ajustes salariales mayores para mantener su poder adquisitivo. No debemos confundirnos con los discursos de los empresarios sobre los subsidios. Los subsidios interesan a los capitalistas porque así pueden mantener a millones de trabajadores precarizados y con salarios por debajo de lo que cuesta la canasta familiar.

A pesar de que la política de subsidios profundizó el déficit fiscal del Gobierno, éste no tuvo más opción que profundizarlos, particularmente luego de los accidentes ferroviarios, pero también por la constatación del carácter parasitario de los empresarios, que dejaron en manos del Estado garantizar el funcionamiento del servicio y se limitaron a sacar sus ganancias de los subsidios. “Actualmente son un gerenciador de un ramal, nada más que eso. Le digo más, lo que recaudo de boletos durante todo el año no me alcanza para pagar el sueldo de todos los boleteros que tengo que poner para venderlos y de los que controlan que se pague el boleto a la entrada y salida del andén. Me convendría no cobrar boleto. Ganaría plata”, dijo el empresario. Se le suma además el hecho de que aumentó sensiblemente la producción de granos y que el transporte de cargas ferroviario no creció al mismo nivel, dando por resultado que en la actualidad el 95% del transporte de cargas se realice en camión.

El reciente conflicto de la línea 60, que torció el brazo a la empresa D.O.T.A., a la burocracia de la UTA y al Gobierno Nacional, plantó la bandera de lucha para recuperar el transporte y ponerlo al servicio de los trabajadores: la estatización bajo control obrero colectivo. Como veremos más adelante, el resultado de estos últimos 15 años es que trenes y colectivos son esencialmente estatales, alrededor del 80% de sus ingresos corresponden a los subsidios del Estado, que se ha visto obligado a profundizar el control sobre los mismos dado el fracaso de las privatizaciones y concesiones.

Evolución de los subsidios

2001-2005

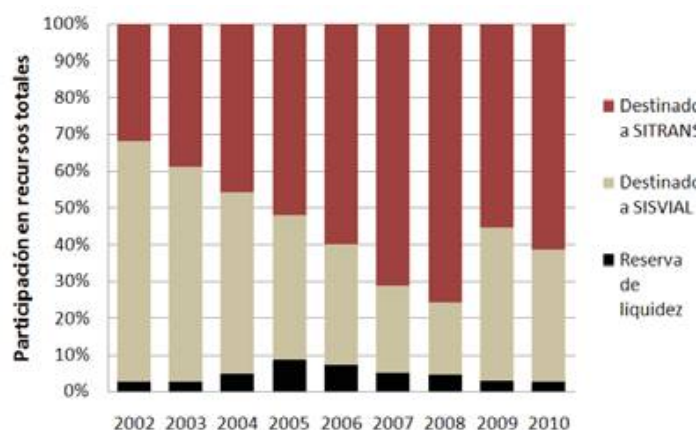
En 2001 el Gobierno creó el Fondo Fiduciario al Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT, decreto 376/01) que originalmente estaba compuesto por el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y el Sistema de Transporte Integrado (SISTRANS) que incluye el Sistema de Transporte Fe-

rroviario (SISFER) y el Sistema de Transporte Automotor (SISTAU). El SISVIAL era el principal destino de fondos del FFSIT y estaba dirigido a financiar obras de infraestructura en la red vial nacional y provincial. Se financiaba a través de la afectación del 22% de la recaudación del impuesto al Gasoil. Gradualmente los fondos fueron

predominando en el SISTAU para subsidiar el precio del combustible, pasando de representar el 30% del fondo en 2002, a casi el 80% en 2008.

Hasta fines del 2005 el sistema de subsidios funcionó sin aportes del Presupuesto Nacional, año en el que superó el 50% de los recursos del FFSIT, lo que llevó al gobierno a cambiar su política, creando regímenes de compensaciones más amplios, con una partida presupuestaria, y corresponderán no solo al consumo de combustible, sino que irá progresivamente tomando cuenta de los distintos costos operativos de las empresas.

Evolución de los destinos del FFSIT 2002-2010



2006-2012

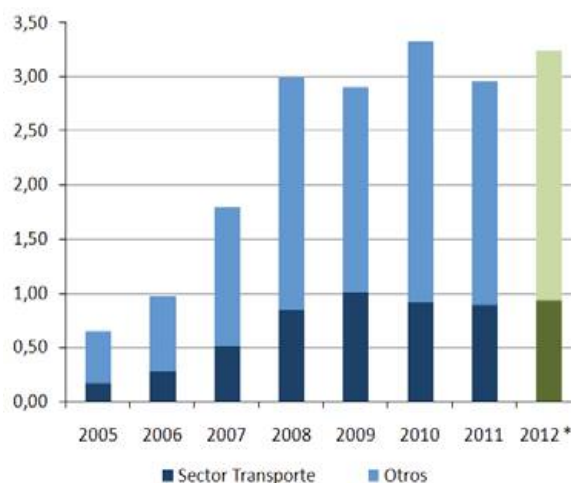
Por medio del Decreto 678/2006 se crea el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) para el SISTAU, con presupuesto nacional para “atender prioritariamente las erogaciones originadas en los incrementos salariales del sector, y la necesidad de renovación del parque móvil”. Los subsidios financiados con transferencias del presupuesto crecieron de 0,2% a 1,5% del PBI entre 2005 y 2011.

Se constata en todo este período el cambio de política del Gobierno Nacional, que año tras año aumenta los subsidios al transporte para hacer frente a los ajustes salariales y a la necesidad de renovación de la flota. Como se ve en el siguiente gráfico las empresas de transporte automotor de pasajeros van convirtiéndose progresivamente en simples concesionarias, al igual que en los ferrocarriles, los ingresos de estas empresas por subsidios pasan de representar menos del 10% en 2002 al 80% en 2010.

El sector cambia radicalmente, la política del Gobierno, que tiene frente a sus narices el hecho innegable de que el transporte no puede estar en manos privadas, decide mantener las cosas como están, favoreciendo la concentración en un puñado de pulpos como DOTA y PLAZA, que se llevan millones de pesos todos los años sin necesidad de invertir capital porque lo hace el Estado.

Esta política no fue privativa del sector transporte sino que se verificó en otras ramas, particularmente en la energía. El total de subsidios (transporte, energía y otros) pasó de 0,6% del PBI a 5,1% entre 2005 y 2013. Los subsidios del Gobierno Nacional al transporte aumentaron siete veces como porcentaje del PBI entre 2005 y 2011.

Subsidios totales al transporte del Estado nacional como porcentaje del PIB, 2005-2012



2012-2015

A partir del 2012 comienza un cambio en la política económica del Gobierno que es producto de empezar a visualizar los signos de agotamiento del crecimiento del ciclo económico. Fundamentalmente se ve obligado a tomar el control de YPF y profundizar el control del transporte ferroviario y automotor.

En el 2013, por medio de la Resolución n°37 del Ministerio del Interior y Transporte (MIT) se aprueba una nueva metodología y el cálculo con el que cuentan hasta el momento de los “costos de la explotación del transporte urbano y suburbano de pasajeros”.

En 2014 y por medio de la Resolución n°39 del MIT, se aprueba la utilización de la SUBE para ejercer un control más veraz sobre los gastos y costos operativos de las empresas.

“Artículo 1° — Establécese que a partir del 1° de febrero de 2014, la información que brinde el SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) respecto a los kilómetros recorridos por las unidades vehiculares, recolectada por el módulo de posicionamiento global (GPS: siglas en inglés de Global Positioning System) que forma parte de dicho sistema, será utilizada con la finalidad de ajustar las compensaciones tarifarias al real nivel de prestación de los servicios de cada operador, como así también para la asignación de los cupos del régimen de Gasoil a Precio Diferencial.”

Unos meses más tarde, por medio de la Resolución 939 del MIT se establece que las empresas que se benefician del subsidio “deberán proceder a la rendición de los fondos del sistema y regímenes complementarios y cupos de gasoil percibidos, por lo períodos devengados a partir del mes de enero de 2010.”.

Luego de más de una década de haber permitido a las empresas del sector que presenten sus “necesidades de subsidio” sin ningún tipo de control, sabiendo que son expertos del fraude, el Gobierno decide cambiar de política e insta a las empresas a presentar sus balances desde el 2010 si quieren seguir recibiendo subsidios. Como anexo de la resolución antes mencionada se aprueba un primer es-

quema de control general de gastos de las empresas. Esta nueva metodología requiere no solo de informar la cantidad de km recorridos y de pasajeros, sino la información completa de sus gastos e ingresos, desde las cantidades y costos de lubricantes, hasta el de renovar la flota, pasando por los salarios de los trabajadores y el mantenimiento, etc. El modelo de informe que deben presentar las empresas fue actualizado en 2015 y finalmente por medio de la Resolución 828 de este año aprueba “los cálculos de costos e ingresos medios de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de la región metropolitana de Buenos Aires”. Esta resolución toma el conjunto de gastos de las empresas para calcular el costo operativo promedio por km recorrido, teniendo en cuenta las diferencias regionales y el tipo de servicio. Aunque siga utilizando el kilometraje como variable para definir el monto de subsidios que corresponde a cada empresa, ya no se trata como en un comienzo de un subsidio al combustible, sino de un subsidio global que abarca todos los elementos para garantizar el transporte.

Composición de los ingresos de las empresas de transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros en el AMBA (porcentaje del total)



¿Participación en las ganancias? ¿O terminar con las superganancias de los monopolios multinacionales?

La política de la clase obrera es imponer, para la totalidad de los trabajadores, a las patronales y el Estado el salario mínimo que alcanza para vivir, es decir que cubra el costo de la canasta familiar, que ronda los \$14.500.

Un sector del oficialismo ha coqueteado con proyectos de participación de los trabajadores en las ganancias, una forma de asociarlos a los beneficios. Los trabajadores tendrían así una retribución adicional en función de los negocios de las empresas. Las empresas en general rechazan este mecanismo, sobretudo porque habilitaría a que los trabajadores conozcan más en detalle las ganancias que tiene la empresa, que accedan a sus libros.

Las enormes ganancias de los bancos, las petroleras, las telefónicas, y otros sectores, devienen muchas veces de su posición monopólica, del poder que tienen para fijar los precios, que pagamos todos los consumidores, todos los trabajadores. En realidad la clase obrera no quiere ninguna sociedad, ninguna participación en los beneficios de estas empresas, su política es nacionalizarlas, porque su actividad es de carácter estratégico para la economía del país.

Parece contradictorio reclamar participación en las ganancias de las telefónicas y al mismo tiempo exigir que bajen los precios de las tarifas, que terminen con los abusos de su posición dominante. El interés de los trabajadores del sector en este caso parece oponerse al interés general de la clase obrera, de terminar con estos monopolios. Lo mismo sucede con las ganancias de los bancos que provienen en buena medida de las costosas comisiones que cobran a todos los usuarios de los servicios bancarios, que provienen de las tasas usureras de interés que cobran

por las tarjetas de crédito, mayormente trabajadores. ¿los trabajadores bancarios se pondrán contentos de recibir una tajada de esas enormes ganancias? Probablemente, y si así fuera disfrutarían indirectamente de los beneficios que extraen los bancos de los exhaustos bolsillos de los trabajadores.

La política de la clase obrera es nacionalizar sin pago los bancos e integrarlos en un sistema único nacional, bajo control de los trabajadores.

La política de la clase obrera es arrancarle a las patronales el máximo salario, no solo el mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. En última instancia, bajo el capitalismo, la lucha de clases determinará a cuánto logramos reducir la plusvalía que nos extraen los patrones, y para los patrones cómo hacen para ampliarla. Nuestra estrategia es terminar con toda forma de explotación del trabajo.

Mucho menos estamos de acuerdo, y lo denunciamos desde un principio, en el hecho de otorgar acciones a los trabajadores en concepto de propiedad participada por la privatización de las empresas que eran del Estado. Como decía Menem, transformar a los proletarios en propietarios. Este es un mecanismo de extorsión y compra de la voluntad de los trabajadores. La propiedad de esas empresas es del conjunto de los trabajadores, del conjunto de los oprimidos, y queremos que efectivamente sean propiedad social (de todos en general y de nadie en particular), no parcialmente de los trabajadores del sector. Lo que importa en esta cuestión es expresar la política de conjunto de la clase obrera, su estrategia.

LER/MRT quiere ingresar al PSOL

La siguiente nota es un análisis acerca de la política que viene desarrollando la organización LER-QI que está enlazada con el PTS argentino. El objetivo del análisis es demostrar cómo la política que desarrollan es la de acercarse y hasta integrarse a los partidos reformistas y socialdemócratas como el PSOL de Brasil. Decidimos reproducirla porque muestra cuáles son los rumbos que decide internacionalmente esta organización que se auto-proclama trotskista.

El MRT (Movimiento Revolucionario de Trabajadores), fundado en abril como nueva organización a partir de la LER-QI (Liga Estratégica Revolucionaria-Cuarta Internacionalista), realizó en julio su primer congreso. La principal deliberación fue la de incorporarse al Psol. Dice la carta enviada solicitando el ingreso:

“En este marco, hoy consideramos que los 1,6 millones de votos recibidos por Luciana Genro en las elecciones de 2014 expresan, todavía de forma muy minoritaria, parte de las aspiraciones progresistas de los trabajadores y de la juventud que protagonizaron las jornadas de junio de 2013 y las huelgas que vienen atravesando al país. Esa tendencia fue demostrada por el crecimiento electoral que el PSOL tuvo en algunas de las ciudades de mayor concentración obrera del país, en las cuales el PT retrocedió de las posiciones que históricamente ocupó, aunque el PSDB ha recuperado la mayor parte de esa declinación. Consideramos que ese resultado electoral coloca al PSOL como un partido que puede expresar conscientemente parte importante de las tendencias de las masas que se desarrollarán a la izquierda del PT.”

En base a esa caracterización, y partiendo de que el PSOL se define como un partido amplio con libertad de tendencias, y tomando en consideración las divergencias que tenemos con cada una de las corrientes que lo componen, abrimos en el MRT (ex LER-QI) un debate sobre la posibilidad de entrar al PSOL y, como corriente interna defender nuestras ideas revolucionarias haciendo parte de este proceso político progresista que consideramos que atravesará al PSOL en el próximo período”.

Ciertamente, se trata de una voltereta en su política. Cuando aún se llamaba LER-QI, afirmó, en septiembre de 2014:

“Frente a esta realidad, ninguno de los candidatos que se reivindican de izquierda se coloca a la altura del profundo cuestionamiento al status quo que se expresó en junio y en la oleada de huelgas y profundas luchas obreras que vienen atravesando al país en los últimos años. El PSOL y el PCB trazan el mismo camino del PT de conciliación

entre los trabajadores y patrones [...]

Como hemos denunciado en varios artículos, la política del PSTU de ligarse al PSOL y al PCB y elogiar a esos partidos como “socialistas” que fortalecen las luchas de los trabajadores para intentar conseguir algún diputado es el más desvergonzado oportunismo electoral, contribuyendo a fortalecer los reformistas y conciliadores y no a los clasistas revolucionarios.”

En noviembre de 2014, decían:

“Las posiciones teóricas e internacionales apuntan hacia una consistencia en este camino de indiferenciación con el PT y se preparan para mayores pasos de reformismo. O sea, retórica socialista, pero defensa de la propiedad privada y del régimen vigente, tal como hacen en la prefectura de Macapá. [...] El PSOL es un partido de tendencias, sus posicionamientos sobre temas internacionales divergen. Sin embargo, se puede trazar una línea general a partir de ver las principales posiciones. Todas ellas convergen en el distanciamiento de una posición anticapitalista. Convergen en identificarse con los partidos de izquierda que en otros países buscan ser parte activa de gobiernos burgueses alternativos a los vigentes, como Syriza en Grecia o ahora “Podemos” en el Estado Español. Esos partidos huyen como el diablo a la cruz a enfrentar temas anticapitalistas así como temas democráticos decisivos en sus países, como el derecho a la autodeterminación en el Estado Español en el caso de Podemos [...]

En resumen, hay muchos matices, sin embargo convergen para apoyar gobiernos capitalistas que sean distintos del modelo actual (o anterior). Todos buscan ser alternativos al gobierno vigente pero no alternativo al capitalismo [...]

O sea, el PSOL va rumbo a ser cada vez menos independiente del PT y cada vez más reformista.”

Como se ve el MRT da un giro de 180° en la caracterización de la ex LER-QI sobre el PSOL a fin de fundamentar su pedido de ingreso. Primero, el PSOL no pasaba de un partido de “reformistas y conciliadores”, ahora que se quieren juntar con el “desvergonzado oportunismo electoral”. Es un partido que “transita el camino de la conciliación”, con cada vez más “indiferenciación” del PT, “cada vez menos independiente de él”. Que tiende a “apoyar gobiernos capitalistas”, “se distancian de las posiciones anticapitalistas” es “cada vez más reformista”.

Pocos meses después, pasa a expresar las “aspiraciones progresistas de los trabajadores y de la juventud”, y “tendencias de masas que se desenvolverán a la izquierda

de la crisis del PT". En fin, prevé un "proceso político progresista que consideramos atravesará el PSOL en el próximo período".

El guiño de la LER/MRT tiene sus raíces en los siguientes fenómenos:

a) Profundo desgaste electoral del PT en el segundo mandato de Dilma Rousseff, desgaste que viene siendo capitalizado parcialmente por la oposición de derecha (PSDB). La LER/MRT prevé que ese desgaste tiende a ser capitalizado por el PSOL. Con una profunda fe en ese pronóstico, se anticipa al supuesto desplazamiento electoral de las masas a la izquierda y procura meterse en el partido que va a canalizarlo.

b) El ascenso de los frentes de izquierda electoral en Grecia y España, como resultado de la incapacidad de los gobiernos y partidos burgueses tradicionales de sostenerse realizando profundos ataques a las condiciones de vida y laborales de las masas. El crecimiento electoral significativo del frente de izquierda en Argentina integrado por su partido hermano el PTS. La LER/MRT prevé que esos fenómenos se repetirán en Brasil como parte de una tendencia general, y busca colocarse en mejores condiciones para responder a ellos.

De esta manera, todas las caracterizaciones hechas anteriormente sobre el PSOL deben ser sepultadas, en nombre del ingreso a ese partido, al "frente de corrientes".

Hace pocos meses, la LER/MRT criticaba al PSOL tratándolo de reformista, conciliador, cada vez más dependiente del PT. Eso servía para explicar su voto crítico al PSTU, en aquel momento señalado como el partido que expresaba la independencia de clase. Ahora, la caracterización del PSOL cambia completamente, el partido pasa a ser una referencia de izquierda para los trabajadores y un frente que puede servir a la construcción del partido revolucionario. Sin ninguna autocrítica ni explicación, la LER/MRT atribuye al PSOL cualidades que no posee, inventa una nueva caracterización sin ninguna ligazón o línea de desarrollo en relación con la anterior, todo para crear las condiciones favorables para su ingreso.

Cambiar de nombre y hacer un congreso para entrar en el PSOL

En abril, la LER-QI cambió de nombre. El cambio incluyó la retirada de la sigla Cuanta Internacionalista (QI en portugués). O sea, la identificación con el trotskismo. MRT es una sigla de acuerdo con el objetivo estratégico de construir y potenciar un frente electoral de izquierda. Y, sin duda, será más agradable para los dirigentes refor-

mistas del PSOL ante el pedido de ingreso. Por lo tanto, la dirección de la LER/MRT convocó a su congreso. Un congreso que no tuvo como tema una elaboración de actualización del programa, sino fundamentalmente la legitimación de propuesta de ingreso al PSOL. Ese método no es el de construcción de un partido programa, un partido revolucionario, sino el de un aparato electoral.

El cambio de nombre hacia MRT ya contiene en sí la idea de formación de un partido no a partir de un programa y por lo tanto de diferenciación política, sino a partir de la confluencia de tendencias "trotskizantes" y socialistas bajo el nombre de una organización común, con una política que solo puede ser coyuntural y expresar la amalgama de las distintas posiciones de esas tendencias. Aunque no estuviera volcado hacia el ingreso al PSOL, el cambio de nombre está a contra mano de la construcción de un partido revolucionario.

Un cheque en blanco a los reformistas

El PSOL respondió al pedido de la LER/MRT de la siguiente forma: a) la condición para el ingreso es el acuerdo con el programa, el cual será discutido y aprobado en el próximo congreso del partido; b) independientemente de eso, el PSOL está dispuesto a ceder la leyenda a LER/MRT para disputar las elecciones 2016.

Claro que la LER/MRT reclamó. Reivindica la participación en los debates que definirán el programa. Defiende que la discusión alrededor de ese programa sea democrática. Como si no conociera las posiciones oportunistas de las corrientes que dirigen el PSOL y que tendrán influencia decisiva en la aprobación de las resoluciones.

El hecho de que la LER/MRT decida ingresar al PSOL bajo las condiciones impuestas, lo que representará es un cheque en blanco para las corrientes dirigentes del partido.

Aceptó un programa que ni siquiera existe aún.

Para algunos dirigentes del PSOL, el ingreso de la LER/MRT es pensado como un grupo que podrá traer problemas internos y hasta resultar en una pérdida de apoyo electoral por su filiación. Entonces, para influenciar los debates internos del partido, exigen que la LER/MRT ingrese bien sometida a las resoluciones que ni siquiera fueron aprobadas aún.

¿Entrismo?

El tipo de entrismo que la LER/MRT está intentando aplicar en el PSOL, ciertamente, no se trata de



HASTA LA VICTORIA
DEL PROLETARIADO SIEMPRE
COMPAÑERO JUAN YÁÑEZ
PRESENTE!!!
APOR
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

leninismo. Este último busca responder al desplazamiento de los explotados de la influencia de un partido reformista, y se construye bajo las condiciones de libertad y defensa del programa y estrategia revolucionaria dentro y fuera del partido y de discusión de las divergencias internas. El punto de partida es siempre la defensa del programa de la revolución proletaria. No se trata de una táctica de fundamento electoral, sin embargo no niega la necesidad circunstancial de intervención en las elecciones burguesas.

La propuesta de entrismo de la LER/MRT en el PSOL, no tiene nada que ver con el leninismo. En el caso del entrismo, sirve para el uso de leyenda electoral, disputa de base, futura ruptura llevándose lo que pueda consigo. Esto porque la LER/MRT no tiene programa, no defiende la estrategia de la revolución y dictadura proletarias (y si la de gobierno de los trabajadores, o gobierno obrero y popular, como ya escribió en sus textos). Su punto de partida no es la influencia del PSOL en el movimiento obrero, sino su expresión meramente electoral. En realidad, una supuesta expresión que evalúan crecerá mucho. Finalmente, su política está centrada en repetir el Frente de Izquierda de Argentina, que ni siquiera fue resultado de una iniciativa de los partidos que lo componen, sino una imposición restrictiva de la legislación electoral burguesa. Y que se encuentra hoy en una profunda crisis, con una disputa feroz entre sus principales organizaciones en los movimientos y sometiendo la formación de sus listas de candidatos a la votación en el sistema electoral burgués (Paso).

El entrismo del LER/MRT se presenta como instrumento para construir un partido revolucionario. Pero está todo en oposición a esto. Cuando no empuña un programa revolucionario, cuando muestra disposición de someter su programa oportunista reformista con el fin de ingresar al PSOL, cuando embellece a ese partido atribuyéndole cualidades que no tiene, nunca tuvo, y nunca tendrá, cuando concibe la construcción de un partido revolucionario a partir de un “movimiento” de tendencias autodenominadas socialistas y no a partir de la construcción de programa, solo podrá concluir como uno más de los aparatos pequeño burgueses electoralistas dejando muy atrás la estrategia de la dictadura del proletariado.

Morenismo, sí!

Al final de junio la LER/MRT publicó una nota rebatiendo las críticas del PCO en su periódico electrónico “Izquierda Diario”. Hay en él una infamia contra el dirigente del POR boliviano Guillermo Lora, sin ninguna cita o prueba, asociado a las posiciones de Jorge Altamira, de PO argentino, alrededor de una supuesta “estrategia nacional”. Será difícil encontrar un texto de Lora que no exprese el internacionalismo proletario y la necesidad de un partido mundial de la revolución socialista. En ese mismo artículo, niegan su vínculo con el morenismo (asociado a las posiciones del dirigente argentino del entonces MAS, Nahuel Moreno).

La decisión de cambio de nombre de LER hacia MRT

se apoya enteramente en las formulaciones políticas morenistas. En el periódico Masas n° 501, apuntamos que la base de su resolución política está en la negación de la estrategia del proletariado, en la reafirmación de presupuestos morenistas de gobierno de los trabajadores y frente de izquierda (clasista) como estrategias, y en la concepción contraria al partido programa.

Ahora, la decisión de incorporarse al PSOL sigue la misma línea: transforma una táctica circunstancial (frente electoral) en un objetivo estratégico.

La LER/MRT es satélite del PTS argentino y solamente no son morenistas ante ellos mismos. Véanse si los principios de Moreno no son reafirmados por esas corrientes:

1) El morenismo tiene como estrategia la constitución de un gobierno de los trabajadores, a ser alcanzado por la vía electoral, por medio de un frente clasista. Niega la estrategia de la revolución y dictadura proletarias, consideradas inalcanzables en la actual etapa histórica. Lo alcanzable serían esos gobiernos de los trabajadores, que desenvolverían las contradicciones internas del capitalismo, llevando en el futuro a la revolución social.

2) El morenismo tiene como táctica esencial la constitución de frentes “clasistas” para las elecciones. Son frentes de izquierda en los que participan todos los autodenominados socialistas o reformistas. Están excluidos de esos frentes los partidos burgueses, en ese punto se distingue del frente popular estalinista. A partir de la necesidad de la victoria electoral, se trata entonces de combinar las urnas y las luchas, como si ambos no tuviesen carácter de clase.

3) El morenismo concibe un partido que exprese su táctica y estrategia: no un partido programa, de cuadros, centralista democrático, sino un partido de núcleos, capaces de albergar muchos militantes para cazar votos, sin mucha divergencia interna o formación política.

4) El morenismo concibe un partido como resultado de la confluencia de distintas organizaciones “socialistas”, y no como partido programa que se forja a partir de la diferenciación y lucha política contra las tendencias que apartan al proletariado y demás oprimidos de la tarea de derrumbar violentamente a la burguesía y la puesta en pie de la dictadura del proletariado. Es lo mismo que la LER/MRT concibe como formación de su organización política como parte de ese movimiento más amplio y sin programa.

La ruptura del PTS con la organización morenista en Argentina fue de aparato, no de programa. Varias organizaciones surgieron de la misma manera. Ninguna rompió programáticamente con el morenismo. Para hacer eso, tenían que partir de la defensa de la estrategia de la dictadura y la revolución proletaria, y de la discusión crítica y auto-crítica del programa del partido que encarnan.

Extraído de Masas 504, Brasil

probablemente así lo interpretaron. Y con razón.

La caracterización es que Dilma ya no gobierna y que la crisis económica tiende a agravarse y se viene generalizando. No por casualidad, corren rumores sobre las divergencias en el seno del gobierno en torno al ajuste fiscal y las amenazas de Joaquín Levy de dejar el ministerio de Hacienda. Todo indica que Dilma, bajo el fuego cruzado, debe mantener a cualquier costo el representante de los banqueros en el ministerio.

Las manifestaciones del día 16 de agosto fueron esperadas como un gran triunfo del PSDB. El hecho de no reproducir la afluencia de la clase media como en las protestas de marzo, desconcertó a la oposición. Los gritos de Aécio Neves no pasaron de una aburrida repetición sobre la corrupción y la incompetencia de Dilma.

Por dónde pasa la defensa del gobierno

Las manifestaciones del 20 de agosto de la CUT, MST, MTST, UNE, PT y PSOL, fueron, una vez más, un reflejo de protestas de la oposición. La burocracia sindical y las direcciones de los movimientos populares sólo se movilizan si es para rechazar los ataques del PSDB al gobierno de Dilma. Esta vez, llamó la atención la presencia de un sector del PSOL, que venía siendo crítico al ajuste fiscal y denunciante de las medidas antinacionales y antipopulares. La militancia del PSOL explicó que no se trataba de manifestaciones en defensa del gobierno y que levantaría las banderas de defensa de los trabajadores. Negociaron para que la convocatoria no contuviese un apoyo a Dilma. Esa maniobra apenas escondió el seguidismo del PSOL.

La dirección de la CUT y sus aliados prepararon el acto para que no hubiera ningún enfrentamiento a Dilma Rousseff. La posición crítica al ajuste fiscal y de defensa del gobierno fue la fórmula encontrada por la burocracia de izquierda petista para diluir ante los ojos de los explotados su oficialismo. Ocultan la brutal disputa interburguesa con la bandera de estar con el gobierno contra la derecha golpista y contra la política económica trazada por Levy. En realidad, no tiene el menor sentido desvincular a Dilma Rousseff de su ministro de Hacienda. Desde el punto de vista práctico, esa operación resulta en un apoyo a un gobierno que ataca los derechos laborales, previsionales, los empleos y los salarios. No se puede ocultar que la política del gobierno petista potencia la ofensiva del PSDB.

El agotamiento del pseudo-reformismo petista y la consecuente crisis política crearon una situación que aparenta confusión e incoherencia. La reelección de Dilma y la continuidad del PT en el poder en alianza con el PMDB llevaron a un cambio significativo de la política económica, que se amparaba en la tesis de que estaba desarrollando en Brasil un nuevo modelo de desarrollo económico, sustentable y con distribución de la renta. La crisis mundial que finalmente arrastró a Brasil hacia la recesión y golpeó el equilibrio provisorio de los factores “macroeconómicos” (superávit primario, superávit comercial, control de la inflación, estabilidad cambiaria, etc.) barrió la impostura del reformismo petista.

Dilma tomó posición anunciando a Joaquín Levy como el ministro que haría la corrección en la política económica. La CUT y sus aliados hicieron de todo para convencer a los

explotados de que en la reelección estaban en disputa “dos proyectos opuestos”: el de Dilma, desarrollo y protección de las conquistas sociales y el de Aécio, neoliberal, recesivo y de eliminación de los derechos. Hoy, esos mismos sindicalistas esconden sus mentiras electorales y se lanzan con nuevas mentiras, apoyando al gobierno que practica una política económica recesiva, de destrucción de fuerzas productivas, desempleo, miseria y hambre.

El avance del PSDB y de sus aliados contra el gobierno, bajo la bandera de la destitución, no hace más que empujar a Dilma Rousseff a buscar el apoyo de los grandes empresarios. La nota de las Federaciones de las Industrias no surgió como un simple acto espontáneo a favor de la estabilidad política. No es un sin-sentido la noticia de que Dilma Rousseff se reconcilió con el presidente del Senado, Renan Calheiros, recibido para discutir su reaccionaria “Agenda para Brasil”, que la CUT, MST, etc. tuvieron que rechazar de palabra.

Se nota que el gobierno petista no recurre a las masas para defenderse contra el golpismo del PSDB. Esa tarea corresponde a la CUT, CTB, MST, MTST. Ni el mismo PT, ni el PCdeB, se animan a convocar con sus nombres a manifestaciones de apoyo al gobierno. Se esconden detrás de la CUT, CTB, MST, etc. la mayoría explotada, sin embargo, no debe dejarse arrastrar por las disputas interburguesas. Las bases de la CUT, los metalúrgicos están bajo el ataque conjunto de las multinacionales y su principal sindicato aparece como responsable del PPE, un violento retroceso en las leyes laborales.

Los burócratas maniobran con los intereses generales de los asalariados y se niegan a organizar un movimiento nacional y unificado en defensa de los puestos de trabajo y de los salarios. Saben perfectamente que Dilma está dispuesta a una nueva embestida contra la Jubilación, pero nada hacen para elevar la conciencia de los explotados y su organización colectiva.

En una explosión, el presidente de la CUT, Vagner Freitas, dijo que es preciso ir a las armas para defender la democracia. La retórica sirvió tan solo para que los opositores cuestionaran el discurso de violencia, cuando la crisis, según ellos, está siendo procesada por las vías democráticas. Son claros los motivos que impiden a la clase obrera llevar a fondo la consigna de los burócratas de combate a la derecha golpista. Joaquín Rodríguez, del MST, hizo el ridículo en público, en la manifestación del día 20 en San Pablo: “Dilma, por el amor de Dios, cambie ese gobierno que está al servicio de los empresarios y no de la clase trabajadora”. Quiso ocultar el carácter de clase de los gobiernos petistas. Ni Lula, ni Dilma dejaron de servir, en ningún momento, a los empresarios y nunca estuvieron al servicio de los explotados.

El camino de las luchas obreras no será el de sostener el gobierno burgués de Dilma. La derrota de la ofensiva de la derecha burguesa no vendrá de la disposición de la CUT y los aliados en apoyar al gobierno y glorificar la democracia fraudulenta que impera en el país. El hecho de que la clase obrera este desorganizada y no cuente con un poderoso partido revolucionario, no libra a la vanguardia de la responsabilidad de defender a fondo la vía de la independencia de clase, la plataforma de reivindicaciones de los explotados y la estrategia revolucionaria del proletariado.

Brasil: Desarrollo de la crisis política

Al principio de agosto, las Federaciones de Industrias de San Pablo (FIESP) y las de Río de Janeiro (FIRJAN) emitieron una nota conjunta exhortando “el buen sentido, equilibrio y espíritu público”. En una entrevista el dueño y presidente del Banco Itaú, consideró que “no hay motivos para sacar de su cargo a Dilma”. También alertó sobre los riesgos de una crisis institucional. La visita de Ángela Merkel a Brasil dio visibilidad a las buenas relaciones cultivadas por Dilma. La presidenta de Brasil aprovechó para propagandizar el “Programa de Inversión y Logística” (PIL), que consiste en un multimillonario programa de concesiones de puertos, rutas, vías de ferrocarril y aeropuertos. Recordemos que poco antes, se había reunido con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En ese contexto, Cristina Kirchner y Nicolás Maduro, declararon su apoyo a Dilma Rousseff. Como puede observarse si el derrumbe del gobierno del PT/PMDB dependiera de la gran burguesía, en la presente situación, no ocurriría.

No es difícil de comprender. El gobierno hizo un cambio radical en la política económica. Aceptó entregar el ministerio de Hacienda a un representante del liberalismo, vinculado a los banqueros nacionales e internacionales. El “ajuste fiscal” se inició con un ataque abierto a las condiciones laborales y previsionales que afectan a las masas. Ante los despidos en masa en el sector automotriz, Dilma agilizó la MP 680, que impone el “Programa de Protección al Empleo” (PPE), presentado como el resultado de la negociación entre gobierno, industria y las Centrales sindicales. Es el interés de la burguesía liquidar toda legislación que proteja a los trabajadores. Una legislación que permita reducir los salarios es un triunfo de los explotadores.

Con todas esas medidas antiobreras y antipopulares, Dilma demostró al gran capital que dejó de lado la tesis reformista de mantener las conquistas sociales. Es claro que tuvo que negociar la anulación en parte de la reducción de impuestos, que favorecían los intereses de grandes sectores industriales y de la construcción civil. De conjunto, orienta la política económica a reducir los gastos en los servicios públicos (educación, salud, vivienda) y garantizar el pago de los intereses y amortizaciones de la gigantesca deuda pública.

Hay un interés general de la burguesía de llevar adelante el Plan Levy (apellidado del Ministro de Hacienda). Es por esto que importantes representantes del gran capital no ven con buenos ojos el bloqueo a las medidas gubernamentales levantado por el PSDB/DEM y parte de la base aliada que se desbandaron hacia la oposición en el Congreso Nacional.

Desde el punto de vista de la economía, tiene sentido el pedido de los empresarios para que se coloque, “por encima de la disputa por el poder, los intereses de Brasil”. En síntesis, como dice el vicepresidente Temer: “Pensar el país por encima de los partidos”. Desde el punto de vista político, cualquier éxito de Dilma Rousseff sería desastroso para el PSDB/DEM que desde la derrota electoral de octubre se propuso impedir la gobernabilidad petista. De manera que un “pacto de estabilidad política”, deseado por Dilma y Temer, e impulsado por Lula, se ha tornado inviable.

Se nota en este proceso que no es mecánica la relación en-

tre los partidos y las fracciones de la burguesía. El PSDB se encuentra dividido. El gobernador de San Pablo, Gerardo Alckmin, que concentra gran fuerza política, por sus vínculos con el gran capital, mantiene la posición expresada por la nota de las Federaciones de las Industrias. Pero la fracción liderada por Aécio Neves busca el enfrentamiento diario con el gobierno y la creación de las condiciones políticas para la destitución.

La continuidad de la crisis política se convertirá en un obstáculo para la concreción del Plan Levy, lo que podría obligar a los sectores capitalistas que no desean el golpe institucional a retirarse y dejar el terreno libre para el movimiento pro-destitución.

Regimentación de la clase media

Las manifestaciones pro-destitución, esta vez, fueron apoyadas directamente por el PSDB. Participó de una amplia campaña. Sus principales líderes se destacaron entre las banderas de “Fuera Dilma” y “Destitución”. Por el momento, todo para el ámbito de la propaganda. La oposición no puede dar un paso concreto mientras no sea presentada una denuncia contra Dilma Rousseff. En este sentido, el PSDB trabaja en dos frentes: financiamiento de la campaña electoral y en el “pedaleo fiscal”.

La identificación de Aécio Neves con la bandera de la destitución causó preocupación en la cúpula del PSDB. ¿Cómo defender la destitución de la Presidenta sin que se presente una violación concreta a la Constitución? Los peesedebistas históricos no quieren ser identificados como golpistas. Teniendo un motivo legal, la destitución pasa a ser una medida constitucional. Pero el hecho es que la propia propaganda, desde el punto de vista legal, aparece como un recurso al margen del proceso democrático burgués. Es por eso que el expresidente Fernando Henrique Cardoso procuró contener los ánimos de Aécio Neves y Carlos Sampaio. Aconsejó jocosamente que Dilma renunciara, como “gesto de grandeza”. Inmediatamente, la dirección del PSDB se reunió para alinear al partido. La destitución solamente sería asumida por el PSDB en el momento en que fuese abierta a la discusión en el Congreso Nacional. Se trata, por lo tanto, de encontrar el momento preciso y evitar un paso en falso que lo exponga como golpista.

La oposición tiene enfrente la tarea de arrastrar, si no es a la totalidad, a la mayoría del PMDB. La destitución, para concluir como una victoria institucional del PSDB debe aparecer como suprapartidaria. Colocada la cuestión en ese plano, la declaración de Michel Temer (vicepresidente) de que es necesario “alguien para reunificar a todos” asombró a los ministros petistas, que vieron una señal de traición. Temer lanzó esa perla al aire. El enigma, no obstante, refleja la profundidad de la crisis de gobernabilidad. No basta dar un adiós al gobierno de Dilma. Es necesario que las fuerzas responsables de su destitución tengan el mínimo de claridad de qué gobierno será colocado en su lugar. No hay dudas de que las conspiraciones están en ese nivel. ¿Sería Temer ese “alguien” capaz de unificar las fracciones de la burguesía? Los petistas

continúa en p. 15